

**INE/CG319/2021**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-38/2019**

## **A N T E C E D E N T E S**

**I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución.** El seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG462/2019** e **INE/CG468/2019**, respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con las determinaciones referidas en el antecedente anterior, el doce de noviembre de dos mil diecinueve, el representante de Movimiento Ciudadano, interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG468/2019, el cual fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior).

Mediante Acuerdo General 1/2017 del ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior acordó que los medios de impugnación que estuvieran bajo su instrucción y que se hubieren presentado contra los dictámenes y resoluciones decretadas por el Consejo General del Instituto, respecto a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con registro local, debían ser resueltos por la Sala Regional que ejerciera jurisdicción en la circunscripción que correspondiera a la entidad federativa atinente.

Por lo anterior, el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo que se dictó en el cuaderno de antecedentes número 190/2019, la Sala Superior ordenó remitir el expediente a la Sala Regional Ciudad de México.

En la misma fecha, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Ciudad de México, ordenó integrar el expediente SCM-RAP-38/2019 y turnar a la ponencia correspondiente. Así el dos de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, y al no haber más trámites pendientes de realizar, en su oportunidad, se cerró la instrucción.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de México, en sesión pública celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió el recurso referido, en los siguientes términos:

**“RESUELVE**

**ÚNICO.** *Se revoca la resolución impugnada, en lo que fue materia de impugnación, para los efectos precisados.*

*(...)”.*

**IV.** Derivado de lo anterior, se advierte que mediante el recurso SCM-RAP-38/2019, la autoridad jurisdiccional determinó **revocar la Resolución** impugnada y el Dictamen que la origina, única y exclusivamente, por cuanto hace a la conclusión **6-C4-GR**, con el fin de salvaguardar eficientemente el derecho de audiencia del actor, por lo que ordenó reponer el procedimiento, a efecto de que la autoridad electoral concediera un nuevo plazo al partido político apelante para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con la falta que se le imputa por la conducta observada, en términos del artículo 25, numeral 1, incisos a) y n), en relación con el artículo 3, párrafo 1, de la Ley de Partidos, y la probable consecuencia que ello podría generar; presentando, en su caso, los elementos de valoración que sustenten su dicho. Consecuentemente, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá revisar y valorar los argumentos y elementos de prueba relacionados con la falta imputada que le presente el recurrente y, con base en ellos, emitir un nuevo Dictamen y resolución al respecto.

Por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las

Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia, se presenta el proyecto de mérito.

## **CONSIDERANDO**

**1.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1, inciso j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho.

**2.** Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SCM-RAP-38/2019**.

**3.** Que el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala Regional Ciudad de México resolvió revocar la Resolución impugnada por cuanto hace a la conclusión 6-C4-GR, a efecto de que se repusiera el procedimiento a efecto de salvaguardar el derecho de audiencia del apelante, concediendo un nuevo plazo al partido para que manifestara lo que su derecho conviniera en relación con la falta que se le imputa por la conducta observada en los términos precisados en la sentencia.

**4.** Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando **TERCERO**, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

**TERCERO. Estudio de fondo**

(…)

• **Indebida garantía de Audiencia**

(…)

**Segundo oficio de errores y omisiones**

*En el caso de la revisión del segundo oficio de errores y omisiones que se le notificó al apelante se advierte que la autoridad fiscalizadora le informó y solicitó lo siguiente:*

*(...)*

*Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, numeral 4 y 121, numeral 1, incisos i) y j) del RF.”*

*(...)*

*Así, **lo fundado de los agravios radica en que**, si bien en principio se dio vista al recurrente con la irregularidad u omisión detectada, lo cierto es que la **conducta finalmente atribuida se sustentó en un supuesto normativo distinto por el que le fue otorgada la garantía de audiencia**, esto es, la UTF no le otorgó al partido la oportunidad de deslindarse de la conducta por la que se le sancionó efectivamente.*

*Esto es, como se desprende del segundo oficio de errores y omisiones, el sustento normativo que dio la irregularidad atribuida se apoyó en las hipótesis normativas de los artículos 1065, numeral 4 y 121 numerales 1, inciso i) y j) del Reglamento, **las cuales se refieren a la prohibición de recibir aportaciones, cuando el aportante sea socio de la persona moral que provea el servicio.***

*Pese a lo anterior, tanto en el Dictamen Consolidado como en la resolución impugnada, se precisó que la conducta infractora se actualizaba por haber incumplido con las obligaciones previstas en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la Ley de Partidos, esto es lo relativo a la obligación del recurrente de **conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos**; así como lo relativo a que apliquen **el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les haya sido entregados.***

*(...)*

*Así, esta Sala Regional, **sin prejuzgar en este momento acerca de la legalidad de tal determinación**, la cual se realizó en función de lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos a) y n), en relación con el artículo 3, numeral 1, de la Ley de Partidos, **advierte que**, en efecto, el segundo oficio*

de observaciones emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización, **debió al menos** hacer del conocimiento al apelante que la conducta consistente en que 'un directivo del partido político se localizó como accionista en el acta constitutiva del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V.', podría generar una infracción atípica que no encuentra propiamente una regulación específica en la Legislación Electoral, ni en la normativa reglamentaria en materia de fiscalización.

(...)

En ese sentido, se advierte que el partido **no tuvo la oportunidad de poder deslindarse o justificar por qué en su concepto**, contrario a lo que sostuvo la responsable, **la contratación de servicios para adquirir combustible puede realizarse con proveedores en los que uno de sus socios sea directivo del partido político.**

(...)"

**5.** Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SCM-RAP-38/2019, en el apartado relativo a la decisión de la sentencia, la Sala Regional Ciudad de México, determinó lo siguiente:

"(...)

**"1.** A fin de salvaguardar eficientemente su derecho de audiencia, esta Sala Regional estima procedente reponer el procedimiento, a efecto de que la autoridad electoral conceda un nuevo plazo al partido político apelante para que manifieste lo que a su derecho convenga, **en relación con la falta que se le imputa por la conducta observada, en términos del artículo 25, numeral 1, inciso a) y n), en relación con el artículo 3, párrafo 1, de la Ley de Partidos, y la probable consecuencia que ello podría generar**, presentando, en su caso, los elementos de valoración que sustenten su dicho.

**2.** Al efecto y en su caso, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá **revisar y valorar** los argumentos y elementos de prueba relacionados con la falta imputada que le presente el recurrente y, con base en ellos, **emitir un nuevo Dictamen** al respecto.

**3.** Con el nuevo Dictamen que emita la UTF, el Consejo General **deberá emitir** una nueva resolución, en la que determine si la falta atribuida al recurrente fue subsanada, o bien si procede imponer una sanción, misma que deberá individualizar nuevamente, con la debida fundamentación y motivación.

(...)"

**6.** Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga.

En este sentido, el Acuerdo **003/SE/15-01-2021** emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, le asignó como financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2021, el monto siguiente:

Partido político	Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el año 2021
Movimiento Ciudadano	\$9,968,712.00

Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Además, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que la condición económica del infractor no puede entenderse de manera estática dado que es evidente que va evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante oficio número 0658, informó que el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:

Partido Político	Resolución	Monto de la Sanción	Deducciones realizadas al mes de marzo de 2021	Montos por saldar
Movimiento Ciudadano	INE/CG468/2019	\$446,008.73	\$314,475.48	\$131,533.25
Movimiento Ciudadano	INE/CG649/2020	\$66,817.19	\$0.00	\$66,817.19
<b>TOTAL</b>		<b>\$512,825.92</b>	<b>\$314,475.48</b>	<b>\$198,350.44</b>

De lo anterior, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo pendiente de \$198,350.44 (ciento noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos 44/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

**7.** Que en tanto la Sala Regional Ciudad de México al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado y la Resolución identificadas como **INE/CG462/2019** e **INE/CG468/2019** respectivamente; este Consejo General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, en relación con la conclusión **6-C4-GR**, misma que deberá valorarse nuevamente, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por el órgano jurisdiccional materia del presente Acuerdo.

**8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual resolvió revocar la Resolución impugnada y el Dictamen Consolidado, respecto de la conclusión 6-C4-GR, para el efecto de que se reponga el procedimiento con el fin de salvaguardar el derecho de audiencia del apelante, concediendo un nuevo plazo al partido para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la falta que se le imputa por la conducta observada en los términos precisados en la sentencia. Por consiguiente, revisar y valorar los argumentos y, con base en ellos, emitir un nuevo Dictamen y resolución en la que, en caso de que proceda una sanción, se deberá individualizar nuevamente con la debida fundamentación y motivación.

Al respecto, esta autoridad electoral valoró y examinó específicamente lo señalado en la sentencia recaída al expediente identificado como SCM-RAP-38/2019, en acatamiento a dicha ejecutoria, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Se revoca la conclusión 6-C4-GR de la resolución controvertida, en los términos precisados en la ejecutoria de referencia.	Se ordena reponer el procedimiento a efecto de salvaguardar el derecho de audiencia del apelante, concediendo un nuevo plazo al partido para que manifieste lo que su derecho convenga en relación con la falta que se le imputa por la conducta observada en los términos precisados en la sentencia. Por consiguiente, revisar y valorar los argumentos y, con base en ellos, emitir un nuevo Dictamen y resolución en la que en caso de que proceda una sanción, se deberá individualizar nuevamente con la debida fundamentación y motivación	Derivado del acatamiento a la Resolución dictada por la Sala Regional Ciudad de México, se repuso el procedimiento de fiscalización en el apartado correspondiente, por lo que se dio garantía de audiencia al partido Movimiento Ciudadano mediante INE/UTF/DA/12091/19, notificado en fecha 20 de diciembre de 2019, al cual dicho sujeto obligado dio respuesta mediante escrito de fecha 14 de enero de 2020.  En consecuencia, esta autoridad se abocó al análisis de la documentación que presentó el partido político incoado, respecto de la observación emitida en el oficio de errores y omisiones, a efecto de que esta autoridad, conforme al ejercicio de sus atribuciones, emita un nuevo Dictamen y Resolución de la parte conducente.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado INE/CG462/2019, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del partido Movimiento Ciudadano, correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho, en los términos siguientes:

**“6. Movimiento Ciudadano/GR**  
(...)

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/9631/19 Fecha de notificación: 19 de agosto de 2019.	Respuesta Escrito Núm. MC/TESO-GRO/0042/2019 Fecha del escrito: 26 de agosto de 2019.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió	
20	<b>Gabinete</b> <b>Documentación adjunta al informe</b>  <i>De la revisión a la documentación adjunta a su Informe Anual, se observó que el sujeto obligado omitió presentar expedientes de proveedores y prestadores de servicio con los cuales realizó operaciones por más de 5,000 UMA. Como se detalla en el cuadro siguiente:</i>	“(…)  <i>En relación al punto Uno se comenta que atendiendo a las normas invocadas por el órgano fiscalizador, es necesario precisar que el caso concreto motivo de la revisión en comentario, no se trata de ninguna aportación recibida del militante, o directivo</i>	<b>No atendida</b>  Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación presentada en el SIF, se constató que, aun cuando menciona que no se trata de ninguna aportación recibida del militante, o	<b>6-C4-GR</b>  El sujeto obligado realizó un inadecuado uso de recursos al contratar con el proveedor “Servi Las Playas, S.A. de C.V.”, cuyo socio es	Uso indebido de recursos.	Artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la LGPP.	
	Nombre o Denominación Social						Montos de las Operaciones Realizadas
	Servi Las Playas, S.A. de C.V.						\$438,444.16



ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/9631/19 Fecha de notificación: 19 de agosto de 2019.	Respuesta Escrito Núm. MC/TESO-GRO/0042/2019 Fecha del escrito: 26 de agosto de 2019.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió										
	<p>Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/8184/19 notificado el 1 de julio de 2019, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF; sin embargo, el sujeto obligado no presentó escrito de respuesta, o aclaración alguna, en relación al requerimiento realizado.</p> <p>No obstante, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda exhaustiva en los diferentes apartados del SIF, constatándose que específicamente en el apartado “Documentación adjunta” se localizó la documentación solicitada, consistente en el acta constitutiva del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V., la constancia de situación fiscal emitida por el SAT y la identificación del C. Oscar Nava García, requeridos por la autoridad, de su revisión, se determinó que cumple con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente; por tal razón por lo que respecta a la presentación de la documentación solicitada, la observación quedó atendida.</p> <p>Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó que un directivo del partido político se localizó como accionista en el acta constitutiva del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V. Como se detalla en el cuadro siguiente:</p>	<p>del partido, ni de ningún ingresos en especie; sino que, como se advierte de los contratos que se anexaron y que obran en el SIF, que celebraron con SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V., tuvieron como objeto la compra del combustible, por el cual la empresa expidió la facturas electrónicas que cumplieron todos los requisitos fiscales establecidos por la ley, y a su vez el partido, efectuó los pagos correspondientes, pero no se trata de ninguna aportación o donativo.</p> <p>(...)”</p> <p>Véase <b>ANEXO R2-1</b> del presente Dictamen, p. 1-2.</p>	<p>directivo del partido, ni de ningún ingreso en especie; sino que se celebraron contratos que tuvieron como objeto la compra del combustible, por el cual la empresa expidió las facturas electrónicas que cumplieron todos los requisitos fiscales establecidos por la ley, y a su vez el partido, efectuó los pagos correspondientes, pero no se trata de ninguna aportación o donativos; no obstante, esta autoridad constató que el partido político realizó operaciones con el proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V., cuyo socio es el C. Luis Walton Aburto como se advierte del acta constitutiva número seis mil quinientos veintiocho (6,528) suscrita por el Notario Público Número Siete, del Distrito Judicial de Tabares , Licenciado David Muñoz Rosas, actuando en el protocolo del Licenciado Miguel García Maldonado, Notario Público Número Diez del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V. y quien de manera paralela desempeña las funciones de Coordinador de la</p>	<p>Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, generándoles un beneficio económico personal indebido; por un importe de <b>\$438,444.16</b>.</p>												
	<table><tr><th>Nombre o Denominación Social del Proveedor</th><th>Montos de las Operaciones Realizadas</th><th>Nombre del Accionista y Directivo del Sujeto Obligado</th><th>Cargo dentro del Partido</th><th>Documento con el que se acredita que es Directivo del Partido</th></tr><tr><td>Servi Las Playas, S.A. de C.V.</td><td>\$438,444.16</td><td>Luis Walton Aburto</td><td>Coordinador de la Comisión Operativa Estatal</td><td>Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Carlos Silvano Saavedra Toache, por el inmueble ubicado en C. Eucaria Apreza No. 4, 2do Piso, Col. Centro, C.P. 39010, Chilpancingo</td></tr></table>	Nombre o Denominación Social del Proveedor	Montos de las Operaciones Realizadas	Nombre del Accionista y Directivo del Sujeto Obligado	Cargo dentro del Partido	Documento con el que se acredita que es Directivo del Partido	Servi Las Playas, S.A. de C.V.	\$438,444.16	Luis Walton Aburto	Coordinador de la Comisión Operativa Estatal	Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Carlos Silvano Saavedra Toache, por el inmueble ubicado en C. Eucaria Apreza No. 4, 2do Piso, Col. Centro, C.P. 39010, Chilpancingo					
Nombre o Denominación Social del Proveedor	Montos de las Operaciones Realizadas	Nombre del Accionista y Directivo del Sujeto Obligado	Cargo dentro del Partido	Documento con el que se acredita que es Directivo del Partido												
Servi Las Playas, S.A. de C.V.	\$438,444.16	Luis Walton Aburto	Coordinador de la Comisión Operativa Estatal	Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Carlos Silvano Saavedra Toache, por el inmueble ubicado en C. Eucaria Apreza No. 4, 2do Piso, Col. Centro, C.P. 39010, Chilpancingo												

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/9631/19 Fecha de notificación: 19 de agosto de 2019.					Respuesta Escrito Núm. MC/TESO- GRO/0042/2019 Fecha del escrito: 26 de agosto de 2019.	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
					o, Guerrero, Página del Partido: <a href="https://movimiento Ciudadano.mx/guerrero/info">https://movimiento Ciudadano.mx/guerrero/info</a>		Comisión Operativa Estatal del partido político incoado, razón por la cual coloca al proveedor en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores generándole al dirigente y accionista proveedor un beneficio económico personal indebido; por tal razón, la observación no quedó atendida.			
	<p>Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las aclaraciones que a su derecho convengan.</li> </ul> <p>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, numeral 4 y 121, numeral 1, incisos i) y j) del RF.</p>									

## Acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional Ciudad de México SCM-RAP-38/2019.

**“DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.**

### 6. Movimiento Ciudadano/GR

<b>ID</b>
20
<b>Observación</b>
Oficio Núm. INE/UTF/DA/9631/19
Fecha de notificación: 19 de agosto de 2019

#### Gabinete

#### Documentación adjunta al informe

*De la revisión a la documentación adjunta a su Informe Anual, se observó que el sujeto obligado omitió presentar expedientes de proveedores y prestadores de servicio con los cuales realizó operaciones por más de 5,000 UMA. Como se detalla en el cuadro siguiente:*

Nombre o Denominación Social	Montos de las Operaciones Realizadas
Serví Las Playas, S.A. de C.V.	\$438,444.16

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/8184/19 notificado el 1 de julio de 2019, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF; sin embargo, el sujeto obligado no presentó escrito de respuesta, o aclaración alguna, en relación al requerimiento realizado.

No obstante, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda exhaustiva en los diferentes apartados del SIF, constatándose que específicamente en el apartado "Documentación adjunta" se localizó la documentación solicitada, consistente en el acta constitutiva del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V., la constancia de situación fiscal emitida por el SAT y la identificación del C. Oscar Nava García, requeridos por la autoridad, de su revisión, se determinó que cumple con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente; por tal razón por lo que respecta a la presentación de la documentación solicitada, la observación quedó atendida.

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó que un directivo del partido político se localizó como accionista en el acta constitutiva del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V. Como se detalla en el cuadro siguiente:

Nombre o Denominación Social del Proveedor	Montos de las Operaciones Realizadas	Nombre del Accionista y Directivo del Sujeto Obligado	Cargo dentro del Partido	Documento con el que se acredita que es Directivo del Partido
Serví Las Playas, S.A. de C.V.	\$438,444.16	Luis Walton Aburto	Coordinador de la Comisión Operativa Estatal	Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Carlos Silvano Saavedra Toache, por el inmueble ubicado en C. Eucaria Apreza No. 4, 2do Piso, Col. Centro, C.P. 39010, Chilpancingo, Guerrero. Página del Partido: <a href="https://movimientociudadano.mx/guerrero/info">https://movimientociudadano.mx/guerrero/info</a>

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente:

- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, numeral 4 y 121, numeral 1, incisos i) y j) del RF.

<p align="center"><b>Respuesta</b>  <b>Escrito Núm. MC/TESO-GRO/0042/2019</b>  <b>Fecha del escrito: 26 de agosto de 2019</b>  <b>Anexo R-2-1 del Dictamen</b></p>
--

*“En relación al punto Uno se comenta que atendiendo a las normas invocadas por el órgano fiscalizador, es necesario precisar que el caso concreto motivo de la revisión en comento, no se trata de ninguna aportación recibida del militante, o directivo del partido, ni de ningún ingresos en especie; sino que, como se advierte de los contratos que se anexaron y que obran en el SIF, que celebraron con SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V., tuvieron como objeto la compra del combustible, por el cual la empresa expidió la facturas electrónicas que cumplieron todos los requisitos fiscales establecidos por la ley, y a su vez el partido, efectuó los pagos correspondientes, pero no se trata de ninguna aportación o donativo.”*

#### Análisis en Acatamiento SCM-RAP-38-2019

##### No atendida

Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado y a la documentación presentada en el SIF, se constató que, aun cuando menciona que no se trata de ninguna aportación recibida del militante, o directivo del partido, ni de ningún ingreso en especie; sino que se celebraron contratos que tuvieron como objeto la compra del combustible, por el cual la empresa expidió las facturas electrónicas que cumplieron todos los requisitos fiscales establecidos por la ley, y a su vez el partido, efectuó los pagos correspondientes, pero no se trata de ninguna aportación o donativos; no obstante, esta autoridad constató que el partido político realizó operaciones con el proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V., cuyo socio es el C. Luis Walton Aburto como se advierte del acta constitutiva número seis mil quinientos veintiocho (6,528) suscrita por el Notario Público Número Siete, del Distrito Judicial de Tabares, Licenciado David Muñoz Rosas, actuando en el protocolo del Licenciado Miguel García Maldonado, Notario Público Número Diez del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V. y quien de manera paralela desempeña las funciones de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido político incoado, razón por la cual coloca al proveedor en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores generándole al dirigente y accionista proveedor un beneficio económico personal indebido; por tal razón, la observación no quedó atendida.

No obstante los argumentos anteriormente expuestos, **en pleno acatamiento** a lo ordenado por la **Sala Regional Ciudad de México**, esta autoridad procedió a **reponer el procedimiento** con el efecto de otorgarle un nuevo plazo al partido político apelante para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la falta que se le imputa por la conducta observada.

En este sentido, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos realizados por la referida autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria identificada con el número de expediente **SCM-RAP-38/2019**, esta autoridad procedió a notificar los oficios siguientes:

- 1) INE/UTF/DA/12091/19 en el que se le hizo de su conocimiento la observación correspondiente en los siguientes términos:

“(…)

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se observó que un directivo del partido político se localizó como accionista en el acta constitutiva del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V. Como se detalla en el cuadro siguiente:

Nombre o Denominación Social del Proveedor	Montos de las Operaciones Realizadas	Nombre del Accionista y Directivo del Sujeto Obligado	Cargo dentro del Partido	Documento con el que se acredita que es Directivo del Partido
Servi Las Playas, S.A. de C.V.	\$438,444.16	Luis Walton Aburto	Coordinador de la Comisión Operativa Estatal	Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Carlos Silvano Saavedra Toache, por el inmueble ubicado en C. Eucaria Apreza No. 4, 2do Piso, Col. Centro, C.P. 39010, Chilpancingo, Guerrero. Página del Partido: <a href="https://movimientociudadano.mx/guerrero/info">https://movimientociudadano.mx/guerrero/info</a>

Esta autoridad constató que el partido político realizó operaciones con el proveedor “Servi las Playas, S.A. de C.V.”, cuyo socio es el C. Luis Walton Aburto como se advierte del acta constitutiva número seis mil quinientos veintiocho (6,528) suscrita por el Notario Público Número Siete, del Distrito Judicial de Tabares, Licenciado David Muñoz Rosas, actuando en el protocolo del Licenciado Miguel García Maldonado, Notario Público Número Diez del proveedor “Servi las Playas S.A. de C. V.” y quien de manera paralela desempeña las funciones de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal del partido político incoado, razón por la cual, coloca al proveedor en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores generándole al dirigente y accionista proveedor un beneficio económico personal indebido.

Se le solicita presentar mediante oficio, las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la LGPP.  
(…)”

Folio de la notificación: INE/UTF/DA/SNE/48598/2020.

2) Oficio INE/UTF/DA/998/20. por el que se le informó la fecha de la confronta.

Derivado de lo anterior, mediante oficio de fecha 14 de enero de 2020, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…)

En primer lugar, la conducta observada se pretende encuadrar en los supuesto (sic) jurídicos que protege el artículo **25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la LGPP** (sic), que refieren fundamentalmente a la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro de los causes (sic) legales y aplicar su financiamiento a los fines entregados.

En ese sentido, dichos dispositivos legales **no son aplicables al caso concreto** porque, por un lado, Movimiento Ciudadano ha conducido sus actividades dentro del marco jurídico aplicable, es decir, no ha incurrido en ninguna ilegalidad y, por otro lado, este instituto político aplicó su financiamiento público ordinario

*exclusivamente para sus actividades ordinarias permanentes como lo es la compra de combustible para el uso de vehículos, producto necesario para poder cumplimentar las obligaciones diarias.*

*La Constitución Federal<sup>1</sup>, la LGPP<sup>2</sup> (sic), la línea jurisprudencial de la SCJN<sup>3</sup> y la Sala Superior<sup>4</sup>, establecen que el financiamiento público de los partidos políticos exclusivamente debe destinarse a tres fines: **actividades ordinarias permanentes**; la obtención del voto durante los procesos electorales y actividades específicas.*

*En lo que nos interesa, las actividades ordinarias permanentes implican que el financiamiento público únicamente debe aplicarse en aquellas erogaciones que tienen por objeto proporcionar un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del instituto político.*

*Los gastos destinados a la **compra de combustible forman parte de las actividades ordinarias permanentes de un partido**, ya que es un medio necesario cuyo fin es la movilización de vehículos pertenecientes a los institutos políticos para desempeñar distintas tareas apegadas a los fines constitucionales y legales.*

*Bajo esa tesitura, la conducta observada por la autoridad fiscalizadora no tiene justificación, porque en ningún momento se realizó un inadecuado uso de recursos al contratar con “Servi Las Playas”, S.A. de C.V., puesto que **el objeto de los contratos consistió únicamente en la compra de combustible** para la movilización de los vehículos pertenecientes a la Comisión Operativa Estatal, esto es, se tratan de erogaciones destinadas dentro de los fines permitidos del financiamiento público para actividades ordinarias.*

*En otros términos, simple y sencillamente **se trata de la celebración de actos jurídicos en el cual** (sic) **dos voluntades manifiestan su libre voluntad de contraer derechos y obligaciones** dentro de diversos contratos de prestación de servicios a título oneroso –de ninguna manera a título gratuito, lo cual si pudiera (sic) traer consigo un beneficio personal indebido por así actualizarse una aportación prohibida por la legislación-.*

***Este proveedor cuenta con la mayoría de los establecimientos del área geográfica del estado de Guerrero**, de ahí la razón para llevar a cabo la compra de combustible con dicha persona moral, pues estatutariamente se encuentra facultado para comprar, vender y distribuir combustible, así como celebrar todo tipo de actos, contratos, convenios y operaciones de cualquier naturaleza que tengan relación con su objeto social.*

*Inclusive, la naturaleza jurídica de dicho proveedor corresponde a una sociedad mercantil, a través del cual el Pleno de la SCJN en su tesis XXXVI/2010, de rubro **SOCIEDAD MERCANTIL. SU CONCEPTO** ha definido a la sociedad mercantil como aquella persona jurídica **distinta de los socios** que la integran derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a fin de combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter*

---

1 Artículo 41, párrafo segundo, Base II.

2 Artículo 25, párrafo 1, incisos a) y n), y 50.

3 Tesis jurisprudencial 66/2014 del Pleno.

4 SUP-RAP-68772017 y acumulado y tesis XI/2012 de rubro FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN DESTINARLO A SUS ACTIVIDADES O FINES PROPIOS.

*preponderantemente económico y con fines de especulación comercial –ganancia o lucro–.*

*Bajo esta lógica, en términos de lo dispuesto por los artículos 4, párrafo segundo y 16, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece, por un lado, que las sociedades mercantiles podrán realizar **todos los actos de comercio necesarios** para el cumplimiento de su objeto social, **salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los Estatutos sociales** y, por otro lado, que las ganancias o pérdidas **serán distribuidas entre los socios** de acuerdo a la proporción de sus aportaciones, salvo pacto en contrario.*

*Por lo anterior, se infieren tres cuestiones:*

- 1) Las sociedades mercantiles tienen fines preponderantemente lucrativos, mismas que pueden llevar a cabo todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo prohibición expresa de las leyes y Estatutos sociales;*
- 2) La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles es completamente distinta de los socios o accionistas que las constituyen, y*
- 3) Si bien los socios o accionistas forman parte del capital de una sociedad mercantil, **tanto las ganancias económicas como pérdidas son distribuidas en proporción a sus aportaciones, esto es, en ningún momento se trata de un beneficio o perjuicio particular, sino colectivo.***

*En este sentido, en el caso concreto, la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero celebró cuatro contratos de prestación de servicios con “Servi Las Playas”, S.A. de C.V., con el fin de comprar combustible, actividad que se encuentra en todo momento permitida dentro del objeto social del proveedor y no existe prohibición expresa en las leyes para no efectuar tal acto. Aunado a que si bien Luis Walton tiene la calidad de socio de dicho proveedor, eso no implica de facto que obtenga un beneficio económico particular, sino se trata de una ganancia colectiva, atendiendo a los fines legales de una sociedad mercantil.*

*En este orden de ideas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en consideración que de la lectura de la Constitución Federal, la LGPP (sic), el Reglamento de Fiscalización y demás disposiciones aplicables, **no existe disposición expresa, ni mucho menos criterio de la autoridad jurisdiccional** que prohíba a un partido político celebrar actos jurídicos con una persona moral cuyo socio forme parte de la estructura de un ente político.*

*Inclusive, no debe pasar desapercibido que con fundamento en los artículos 41, Base V, apartado A, de la Constitución Federal; 30 párrafo 2 y 35, párrafo 1, de la LGIPE (sic) **el INE se rige principalmente por el principio de legalidad, esto es, que sus actividades en todo momento deben apegarse a las disposiciones normativas** ya que las consecuencias de Derecho de una norma jurídica surgen a partir de la actualización de la hipótesis normativa.<sup>5</sup>*

*Aunado a lo anterior, es importante exponer a la autoridad que las concesionarias (empresas que compran, venden y distribuyen combustible) fijan el precio de la*

---

<sup>5</sup> Rico Álvarez, Fausto, et. al, *Introducción al estudio del derecho civil y personas*, Porrúa, México, 2016, p.23.

gasolina a partir de 5 componentes principales (los primeros cuatro en control del gobierno a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).<sup>6</sup>

1. Referencias internacionales de los precios de la gasolina.
2. Tipo de cambio.
3. Costo de logística.
4. Impuestos.
5. **Margen de ganancia de las estaciones de servicio.**

De lo anterior se desprende, por un lado, que **las concesionarias que se dedican a esta actividad no fijan el precio del combustible a su libre albedrío** y, por otro lado, que la variación del precio de la gasolina que diferencia una concesionaria de la otra es el margen de ganancia de las estaciones de servicio, es decir, se trata de un elemento determinado por factores ajenos a este partido político, de ahí que en ningún momento se coloque al proveedor en un (sic) posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores.

Inclusive, a fin de que las personas conozcan el promedio del precio de la gasolina, el Gobierno de México a través de la Comisión Reguladora de Energía da a conocer los precios diarios promedio nacional y precios mensuales por entidad federativa de gasolinas y diésel. Mediante esta información se puede desprender el promedio de la gasolina en Guerrero durante el ejercicio 2018.<sup>7</sup>

Para mayor certeza, fueron solicitadas a otras empresas (gasolineras) que nos proporcionaran los precios del mercado establecidos para la venta de gasolina al público, obteniendo de ellos constancias que nos fueron expedidas por las siguientes estaciones.

a) Estación de gasolina número 2906, sita en carretera Nacional México-Acapulco KM, 369; la número 0303, ubicada en Av. Costera Miguel Alemán y Malecón de Turismo;

b) Estación de Gasolina número 5182, ubicada en Boulevard Vicente Guerrero Saldaña número 420.

De ambas gasolineras, de las constancias de precios expedidas se advierte que dichos precios que fueron pagados por la adquisición de la Gasolina a la persona moral SERVI LAS PLAYAS, S.A. de C.V., por Movimiento Ciudadano Guerrero, están dentro de los parámetros que correspondieron por la venta de gasolina en el año 2018.

En suma a todo lo antes establecido y a fin de demostrar que **la conducta observada no se trata de un ilícito atípico** es necesario exponer la línea argumentativa mutatis mutandis de la tesis I.3º.C.323 C (10ª) dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro “ILÍCITOS ATÍPICOS EN EL ÁMBITO CIVIL, SUS ELEMENTOS”, en apoyo a la doctrina de los “ilícitos atípicos” de

6 Véase Ordaz, Yeshua, ¿Cómo se determinan los precios de las gasolinas? Por MILENIO, 10 de abril de 2019. Disponible en <http://www.milenio.com/negocios/mas-negocios/gasolina-como-se-determina-su-precio-en-mexico>

7 Véase: <https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel> en Precios Diarios Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad Federativa de Gasolinas y Diésel.



Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero<sup>8</sup>, en el cual se sostiene esencialmente lo siguiente:

- Las normas regulativas de mandato son aquellas que se conforman por reglas y principios, mismas que ordenan, prohíben o permiten determinadas conductas.
- Los actos ilícitos son aquellas acciones contrarias a las normas regulativas de mandato. Tales actos, a su vez, se dividen en dos tipos: 1) los ilícitos **típicos**, que son conductas contrarias a las **reglas** de mandato, y 2) los ilícitos **atípicos**, que son acciones opuestas a los **principios** de mandato. Esto es, mientras en los ilícitos típicos se afecta una regla (expresa) de mandato, en los ilícitos atípicos no necesariamente se afecta a una regla, sino a un principio.
- A fin de identificar un ilícito atípico –en el cual llevar a cabo una conducta pueda afectar a un principio– se requiere de la actualización de los siguientes elementos:

1) **La existencia (en principio) de una acción permitida por una regla:** En el caso concreto no se actualiza este elemento porque de la lectura legislación aplicable (sic) a los partidos, no existe algún tipo de regulación referente a que los institutos políticos no puedan contratar con una persona moral cuyo socio forme parte de la estructura del mismo ente político.

2) **La producción de un daño (en sentido amplio) como consecuencia, intencional o no, de esa acción:** Dicho elemento no se satisface porque la simple contratación con un proveedor en el cual uno de sus accionistas se desempeña a la vez como miembro de la estructura partidista, no produce un daño pues en los actos jurídicos no obra algún vicio del consentimiento (dolo, mala fe, falta de formalidad del contrato, etc.). Como se ha mencionado fue una simple operación mercantil, que se realizó dentro de la libertad que tiene cada instituto político de adquirir los bienes y servicios que más le convengan y que se ajusten dentro del objeto partidista.

3) **El carácter injustificado del daño, a la luz de los principios relevantes del sistema:** La conducta observada por la autoridad no causa alguna trasgresión a ningún principio democrático previsto por la Constitución Federal.

Por ejemplo, el principio de certeza no se afecta porque la autoridad puede tener plena constancia del origen, monto, aplicación y destino de los recursos de Movimiento Ciudadano (financiamiento público para actividades ordinarias).

4) **El surgimiento de una nueva regla (como pauta de conducta), a partir de un balance entre esos elementos para limitar el alcance de la acción permitida, o calificar como prohibidos ciertos comportamientos que, en un principio, parecieran permitidos:** Esta regla no se cumple, toda vez que, tal como se ha reiterado en el presente escrito, no hay disposición jurídica expresa que prohíba que un partido pueda llevar a cabo actos jurídicos con una persona moral (sic), cuyo socio forme parte de la estructura del mismo ente político, lo anterior bajo la lógica que implica imponer una norma restrictiva puesto que la misma violaría diversos derechos entre ellos el de auto organización de los institutos políticos así como el consagrado en el artículo 5 de la CPEUM que

---

<sup>8</sup> Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, *Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de la ley y la desviación de poder*, Ed. Trotta, Madrid, 2000.

*establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.*

*Expuesto los elementos anteriores es que se infiere que la conducta observada no atenta contra alguna norma jurídica (regla) ni contra algún principio constitucional y por lo cual no es aplicable el criterio establecido por la Sala Superior en la sentencia **SUP-JDC-057/2002**, esto porque dicho antecedente refiere del abuso del derecho político electoral que tienen los ciudadanos de afiliarse a una organización política y hacer uso del financiamiento que se le otorgaba a cada una de ellas. **EN EL CASO CONCRETO NO EXISTE BENEFICIO ECONOMICO (sic) A TRAVES (sic) DEL INDEBIDO O INADECUADO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.***

*Como ya se demostró hasta ahora, no existió ningún abuso de la legislación al contratar a dicha persona moral puesto que ni **Movimiento Ciudadano ni Luis Walton Aburto** se vieron beneficiados económicamente, puesto que:*

- 1. Se celebró una operación mercantil dentro de los fines permitidos por la legislación.*
- 2. No existe una sobrevaluación o subvaluación en el costo de la gasolina, pues esta se adquirió al precio que se establece para la sociedad en general.*
- 3. Si bien Luis Walton Aburto tiene la calidad de socio o accionista, el (sic) no llevó a cabo la celebración de los contratos.*
- 4. las erogaciones tuvieron el fin constitucional y legal, del cual se puede observar perfectamente su origen, monto, aplicación y destino, es decir no escapa de los objetivos que tiene la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.*
- 5. Los Estatutos de este partido político en ningún momento prohíben dicha relación comercial.*
- 6. Esa autoridad electoral debe analizar que Luis Walton Aburto no es el único socio de dicha persona moral, por lo cual es incorrecto asegurar un beneficio personal indebido, puesto que las ganancias de dicha operación mercantil es repartida entre la cantidad de socios.*

*Es decir, en el presente asunto la autoridad electoral no puede afirmar que Movimiento Ciudadano incurrió en un **fraude a la Ley**, puesto para que un sujeto de derecho incurra en este supuesto debe frustrar los propósitos de la ley, violar o eludir el espíritu que la anima con el fin de llegar a un resultado contrario al deseado, con el pretexto de respetar su letra, robustece lo anterior la tesis aislada I.8°.C.23 K (10ª.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro **FRAUDE A LA LEY E INTERPRETACIÓN LÓGICA. SU CONCEPTO.***

*Ahora bien, se afirma lo anterior pues que aún y cuando no existe norma sancionatoria que regule la conducta que ahora se observa, tampoco existieron elementos que en su conjunto permitan inferir una violación a la Legislación Electoral por las siguientes consideraciones:*

- 1) No existe disposición expresa ni mucho menos criterio de la autoridad jurisdiccional que prohíba a un partido político celebrar actos jurídicos con una persona moral cuyo socio forme parte de la estructura de un ente político.*
- 2) En ningún momento se realizó un inadecuado uso de recursos al contratar con el proveedor, pues el objeto de los contratos consistió únicamente en la compra de combustible para la movilización de los vehículos pertenecientes a la*

*Comisión Operativa Estatal, esto es, se tratan de erogaciones destinadas dentro de los fines permitidos del financiamiento público para actividades ordinarias de Movimiento Ciudadano.*

- 3) En ningún momento **existió simulación alguna** por parte de este instituto político a efecto que Luis Walton Aburto se viera beneficiado económicamente, afirmar lo anterior resultaría absurdo puesto que la autoridad electoral cuenta con la documentación necesaria para determinar que se trató de una simple adquisición de combustible con un proveedor.*
- 4) Las concesionarias que se dedican a distribuir o vender combustible no fijan su precio a su libre albedrío, puesto que los precios son fijados bajo ciertos estándares o elementos del Gobierno de la República.*
- 5) No se coloca al proveedor en un posición (sic) superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores, ya que la variación del precio de la gasolina que diferencia una concesionaria de la otra es el margen de ganancia de las estaciones de servicio.*
- 6) No se actualiza un **ilícito atípico** puesto que en ningún momento contratar con un proveedor en el cual uno de sus socios forme parte de una estructura partidista, trae consigo la afectación a los principios democráticos.*
- 7) No se incurre en un fraude a la ley pues para incurrir en dicha afirmación, es necesario la existencia de un supuesto normativo en el cual se busca obtener un fin ilícito a través de un medio lícito. En el caso no existe supuesto normativo que regule la conducta observada, por tanto, no se actualiza el fraude a la ley.*
- 8) Imponer sanciones por este tipo de conductas traería consigo imponer requisitos implícitos en la celebración de contratos entre un partido político y un proveedor. Inclusive, se restringiría tácitamente el objeto social del proveedor –a pesar de estar facultado estatutariamente- pues le impediría celebrar actos jurídicos con partidos.*
- 9) En el caos que nos ocupa no es competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, determinar el posicionamiento de una persona moral dentro del mercado, si no (sic) verificar la legal contratación de proveedores que mejor convengan a los intereses del partido político y que la adquisición del producto o servicio se ajuste a lo establecido en la normativa electoral, por lo cual es incorrecto pronunciarse si la presente conducta afecta o no a otros proveedores.*
- 10) No se violentó el principio de legalidad con la conducta observada, ya que dicha autoridad a través de la documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, puede constatar que dicha operación se llevó a cabo dentro de los causas (sic) legales; además, que a diferencia de otro producto, la fijación del precio de la gasolina no puede variar de un consumidor a otro, por tanto, es dable inferir que el combustible se adquirió en los mismos términos que cualquier otra persona.*

*Movimiento Ciudadano Guerrero, promueve la participación de todos los ciudadanos en la vida democrática del estado, contribuyendo a sus derechos de representación política y al acceso de éstos al ejercicio del poder público, conduciéndose todos los militantes siempre dentro de las normas y principios legales, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.*

*(...)*”.

Véase ANEXO R2-2 del Dictamen.

Del análisis a las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, se constató que señaló que la compra de combustible forma parte de las actividades ordinarias permanentes del partido; que el objeto de los contratos consistió únicamente en la compra de combustible; que se trata de la celebración de actos jurídicos en los cuales las partes manifiestan su libre voluntad de contraer derechos y obligaciones y que el proveedor cuenta con la mayoría de los establecimientos del área geográfica del estado de Guerrero. Sin embargo, esta autoridad constató que durante el ejercicio dos mil dieciocho, el partido incoado celebró cuatro contratos de fechas 01 de enero (con vigencia al 31 de marzo), 01 de abril (con vigencia al 30 de junio), 01 de julio con vigencia al 30 de septiembre y 01 de octubre con vigencia al 31 de diciembre con el proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V., cuyo **socio es el C. Luis Walton Aburto** como se advierte del acta constitutiva número seis mil quinientos veintiocho (6,528) suscrita por el Notario Público Número Siete, del Distrito Judicial de Tabares, Licenciado David Muñoz Rosas, actuando en el protocolo del Licenciado Miguel García Maldonado, Notario Público Número Diez del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V., y **quien de manera paralela desempeña las funciones de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal** del partido político incoado, razón por la cual **coloca al proveedor en una posición superior, mejor, preferente o conveniente** respecto de otros proveedores generándole al dirigente y accionista proveedor un **beneficio económico personal indebido**.

#### **Beneficio económico**

Para arribar a la conclusión de que existe un beneficio económico personal indebido, esta autoridad fiscalizadora electoral tomó en cuenta tres aspectos fundamentales que se presentan en el caso en concreto:

- 1) Calidad de Coordinador Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano
- 2) Calidad de socio accionista del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V.
- 3) Decisión de contratar con dicho proveedor

Así, se procederá a analizar cada uno de estos elementos con la finalidad de esclarecer el proceder de esta autoridad electoral:

- 1) Calidad de Coordinador Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano

Como se ha señalado con anterioridad y lo ha confirmado el propio partido político incoado, el C. Luis Walton Aburto fue Coordinador de la Comisión Operativa Estatal en el ejercicio en revisión, órgano directivo que de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos de Movimiento Ciudadano, tiene los deberes y atribuciones siguientes:

#### ***“ARTÍCULO 30 DE LAS COMISIONES OPERATIVAS ESTATALES***

- 1. La Comisión Operativa Estatal es la autoridad ejecutiva, administrativa y representativa de Movimiento Ciudadano en la entidad. (...)*
- 2. La Comisión Operativa Estatal tiene los deberes y atribuciones siguientes:*

- a) Representar a Movimiento Ciudadano y mantener sus relaciones con los poderes del Estado, así como con organizaciones cívicas, sociales y políticas de la entidad
- b) Nombrar a las personas responsables de los órganos de dirección. Los nombramientos deberán previamente ser comunicados a la Comisión Permanente para su aprobación
- c) Convocar a las reuniones del Consejo Estatal, de la Coordinadora Ciudadana Estatal y de la Junta de Coordinación
- d) Dirigir y operar, a nivel de la entidad federativa, las directrices nacionales, la acción política y la acción electoral de Movimiento Ciudadano. Informar a los órganos de dirección acerca de los mecanismos y estructuras, de la estrategia política y vigilar su cumplimiento
- e) Presentar el informe de actividades de la Comisión Operativa Estatal ante el Consejo Estatal y la Convención Estatal
- f) Dirigir la gestión administrativa y financiera, de manera que el ejercicio de los recursos se apegue a los Estatutos, a los requerimientos de la normatividad electoral, y a los criterios contables, administrativos y financieros de la Tesorería Nacional de Movimiento Ciudadano**
- g) Someter a la aprobación del Consejo Estatal el programa general de actividades de la Comisión Operativa Estatal e informarle sobre sus labores
- h) Expedir y firmar los nombramientos acordados por la Coordinadora Ciudadana Estatal y la Comisión Operativa Nacional, para la acreditación de las representaciones de Movimiento Ciudadano y de las candidaturas ante los Organismos Públicos Locales electorales
- i) Representar a Movimiento Ciudadano con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración y actos de dominio, incluyendo los que requieran cláusula especial conforme a la Ley.** Esto a excepción de la titularidad y representación de la relación laboral, que será en términos de lo establecido en el Artículo 38 de los Estatutos. El ejercicio de los actos de dominio requerirá la autorización previa, expresa y por escrito de la Comisión Operativa Nacional. La Comisión Operativa Estatal tendrá la facultad para delegar poderes para pleitos y cobranzas, debiendo contar con la autorización previa, expresa y por escrito, de la Tesorería Nacional de Movimiento Ciudadano para suscribir títulos de crédito y abrir cuentas de cheques
- j) La coordinadora o coordinador de la Comisión Operativa Estatal queda acreditado como representante ante la Coordinadora Ciudadana Nacional
- k) Informar sistemáticamente y cuando así se lo soliciten la Coordinadora Ciudadana Nacional y/o la Comisión Operativa Nacional sobre sus actividades
- l) Las demás que le encomienden la Convención Estatal, el Consejo Estatal, la Coordinadora Ciudadana Estatal, la Junta de Coordinación, la Comisión Permanente y la Comisión Operativa Nacional; así como los presentes Estatutos y Reglamentos de Movimiento Ciudadano

**[Énfasis añadido]**

Al respecto, es importante resaltar las facultades establecidas en los incisos f) e i) en los que se señalan que la Comisión Operativa Estatal es la facultada para **dirigir la gestión administrativa y financiera, así como representar a Movimiento Ciudadano con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas**, así como para actos de administración y actos de dominio, incluyendo los que requieran cláusula especial conforme a la Ley.

En consecuencia, el C. Luis Walton Aburto en su calidad de Coordinador de la Comisión Operativa Estatal y en razón de formar parte de dicho órgano, tomaba decisiones respecto a la dirección de la gestión administrativa y financiera del partido incoado, así como representarlo con las facultades más amplias.

## 2) Calidad de socio accionista del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V.

Se ha señalado con anterioridad y lo ha confirmado el propio partido político incoado, que el C. Luis Walton Aburto es socio accionista de la persona moral Servi Las Playas, S.A. de C.V. como se advierte del acta constitutiva número seis mil quinientos veintiocho (6,528) suscrita por el Notario Público Número Siete, del Distrito Judicial de Tabares, Licenciado David Muñoz Rosas, actuando en el protocolo del Licenciado Miguel García Maldonado, Notario Público Número Diez.

En dicho documento público se constituye la sociedad mercantil de la que el C. Luis Walton Aburto forma parte como socio accionista y que tiene un fin preponderantemente económico<sup>9</sup>, junto con el de sus socios, sociedad que se constituye de la siguiente manera:

ID	Nombre	No. de acciones o partes sociales
1	Walton Valle Raúl	750
2	Walton Aburto Luis	750
3	Aburto Rodríguez Gloria	750
4	Alvarez Romo María Guadalupe	720
5	Bernal Aburto Zozimo	30

Del cuadro que antecede, se visualiza que son cinco socios accionistas de la persona moral Servi Las Playas, S.A. de C.V. y tres de ellos son los que mayor número de acciones tienen, entre ellos el C. Luis Walton Aburto. Adicionalmente, del acta constitutiva se desprende que éste también tiene la calidad de administrador de la persona moral multicitada, con facultades de poder general para pleitos y cobranzas y poder general para actos de administración.

Por lo tanto, el **C. Luis Walton Aburto es uno de los principales accionistas** de la persona moral Servi Las Playas, S.A. de C.V., quien adicionalmente guarda la calidad de administrador de dicha empresa.

## 3) Decisión de contratar con dicho proveedor

Derivado de la revisión de los informes anuales del ejercicio 2018, se constataron las operaciones entre Movimiento Ciudadano y Servi Las Playas, S.A. de C.V., circunstancia que ha confirmado el propio sujeto obligado. De ahí que se advierte que el ente político en revisión reportó tal gasto en el Sistema Integral de Fiscalización.

<sup>9</sup> De conformidad con los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 2688 del Código Civil Federal. Consultar también en María Susana Dávalos Torres. Manual de introducción al derecho mercantil. Recuperado de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3259/10.pdf>, pág. 120

Ahora bien, en atención al acatamiento de la ejecutoria dictada por la Sala Ciudad de México, y a partir de la respuesta del partido a la garantía de audiencia ordenada, esta autoridad fiscalizadora electoral se encaminó a analizar la posibilidad de contratar con otros proveedores o, dicho de otra manera, a estudiar el por qué ese proveedor era la única opción de contratación, en un contexto de libre albedrío del partido político de contratar con quien más le conviniera, sobre todo teniendo en cuenta que Movimiento Ciudadano señaló que Servi Las Playas, S.A. de C.V. cuenta con la mayoría de los establecimientos del área geográfica del estado de Guerrero.

De ahí que, tomando en cuenta el domicilio señalado en las hojas membretadas de Movimiento Ciudadano Guerrero, así como el del proveedor Servi Las Playas, S.A. de C.V. y las bitácoras de control interno de combustible que el propio sujeto obligado registró en el Sistema Integral de Fiscalización, se realizó una búsqueda de las gasolineras en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con la finalidad de constatar las empresas que brindan dicho servicio en el municipio señalado y verificar si la empresa Servi Las Playas, S.A. de C.V. es la de mayor establecimientos del área geográfica.

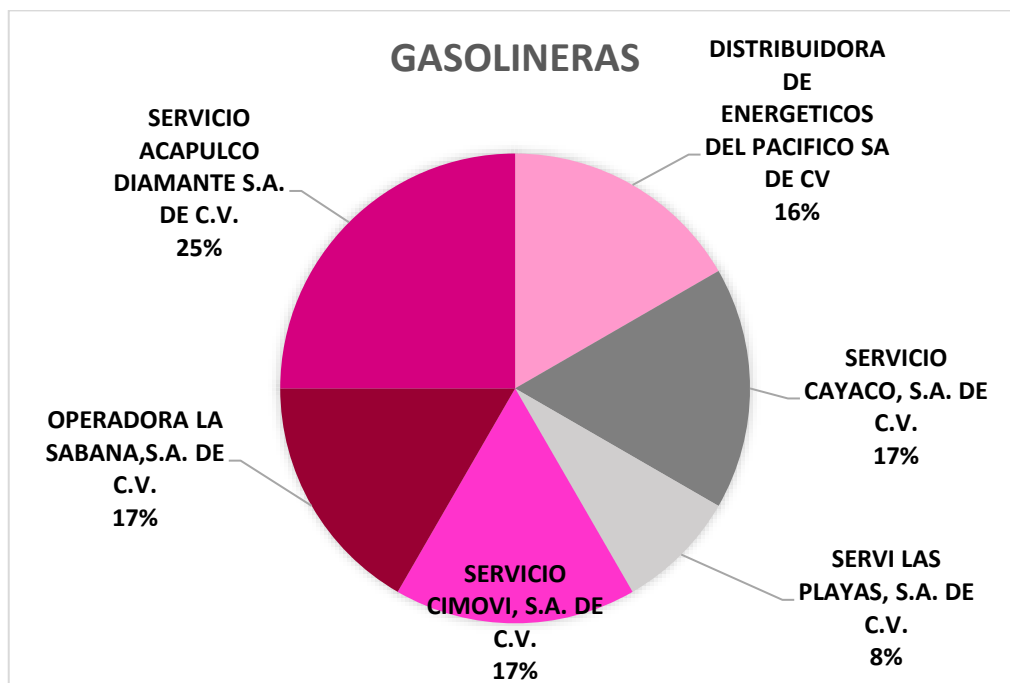
Dicha búsqueda se realizó precisamente en el sitio que señaló el propio partido político incoado, es decir, en la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno de México<sup>10</sup>, que arrojó que en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, existen setenta y un (71) domicilios de establecimientos que brindan el servicio de gasolinera, con sesenta y cinco (65) razones sociales, entre ellos Servi Las Playas, S.A. de C.V., quien únicamente cuenta con un (1) domicilio en el que brinda el servicio en revisión. Véase **Anexo A** del presente Dictamen.

Visto desde otra perspectiva, como se desprende del **Anexo A**, las personas morales con mayor presencia en el municipio multicitado, en virtud de que cuentan con más de un domicilio en el que brindan el servicio en comento son: **1)** Distribuidora de Energéticos del Pacífico S.A. de C.V.; **2)** Servicio Cayaco, S.A. de C.V.; **3)** Servicio Cimovi, S.A. de C.V.; **4)** Operadora La Sabana, S.A. de C.V.; **5)** Servicio Acapulco Diamante S.A. de C.V.; por lo que tampoco resulta adecuado señalar que Servi Las Playas, S.A. de C.V. es quien tiene mayor presencia en el área geográfica.

De manera gráfica, la comparativa entre las gasolineras que tienen mayor presencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, Servi Las Playas, S.A. de C.V. representa el 8%, como se muestra a continuación:

---

<sup>10</sup> <https://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html>



De manera que el ente político sujeto a revisión decidió contratar con la empresa que representa el 8% en comparación con otras empresas que contaban con mayor presencia y que en contraste representan hasta el 25%, es decir, **contrató con una persona moral que no es la que mayor presencia tiene en el área geográfica buscada.**

Como consecuencia de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora electoral solicitó al partido político Movimiento Ciudadano aclarara lo que a su derecho conviniera, derivado de un posible beneficio personal indebido, ya que se colocaba al proveedor en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente frente a otros proveedores.

En otras palabras, esta autoridad electoral consideró que al coexistir de manera simultánea los tres elementos analizados de manera previa, es decir; 1) que un dirigente partidista contaba con facultades de decisión en la gestión administrativa y financiera; 2) que al mismo tiempo es socio accionista mayoritario de la persona moral contratada como proveedor; 3) que el partido político únicamente contratara la compra de combustible con la empresa de la que es socio mayoritario (Servi Las Playas, S.A. de C.V.), se acredita un beneficio personal indebido, que constituye una conducta ilícita atípica.

 **Hecho ilícito atípico**



Esta autoridad electoral considera que en el presente asunto se presenta un hecho ilícito atípico, ya que si bien no hay norma legal específica, sí existe un principio que tiene un fin, el cual se considera vulnerado.

En contraste con las conductas ilícitas que están descritas en una norma o legalmente tipificadas, los ilícitos atípicos obedecen a la necesidad de dar coherencia valorativa a todo el sistema jurídico.

Así, los ilícitos atípicos obligan a tener presentes todas las circunstancias que rodean una acción para determinar que, si bien no se prevé prohibición o sanción específica, existe la necesidad de tutelar el esquema valorativo que permea a todo el orden legal, con independencia de su instrumentación.

Sobre el particular, la Sala Superior en la sentencia SUP-JDC-057/2002, citando a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero en su obra *Ilícitos atípicos* (Madrid: Trotta, 2000) ha establecido lo siguiente:

*“El fraude de ley suele presentarse como un supuesto de infracción indirecta de la ley, a diferencia de los ilícitos que nosotros hemos llamado ‘típicos’, en los que se da un comportamiento que se opone directamente a una ley. La estructura del fraude consistiría, así, en una conducta que aparentemente es conforme a una norma (‘a la llamada norma de cobertura’), pero que produce un resultado contrario a otra y otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto (‘norma defraudada’). Igualmente, en la citada sentencia, la H. Sala Superior retoma lo dicho por Caffarena y Laporta, en la voz ‘fraude de ley’, de la Enciclopedia Jurídica Básica (Madrid: Civitas, 1995), en el sentido de que: El artículo 6.4 CC (Código Civil Español), que se encuentra en el Título preliminar dentro del capítulo dedicado a la eficacia general de las normas jurídicas, contempla la figura del fraude de ley: ‘los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir’”.*

Tomando en consideración lo anterior, así como lo sustentado por la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP-034/2003, se advierte que una conducta puede no estar expresamente prohibida, lo cual significa que puede estar *prima facie* permitida, pero no permitida sin más, porque cabe la posibilidad de que esa conducta produzca un resultado contrario a otra y otras normas.

Lo anterior ha conducido a estudiar el principio de legalidad y que en palabras de Israel Arvizu Galván, Nohemí Bello Gallardo, José Fernando Vázquez Avedillo en *“Principio de Legalidad vs Principio de Juridicidad: Evolución Constitucional en México”* el principio de legalidad ha evolucionado “a través de la transición de paradigmas en el sistema jurídico mexicano, atendiendo esencialmente al respeto absoluto de los derechos humanos. Si bien es cierto hoy en día se sigue hablando del principio de legalidad como eje central de la actuación de la autoridad, sin embargo, debe quedar en claro que la visión iusnaturalista nos permite observar una legalidad objetiva, también conocida como juridicidad, pues este principio va más allá de la letra

de la ley, pues implica la aplicación de principios y valores que contienen la actuación de la autoridad para evitar posibles abusos de poder.”

De ahí que, el principio de legalidad - legalidad objetiva o juridicidad- no solo se constriña en la norma, sino que también toma en cuenta los principios y valores de un sistema jurídico integral.

Aunado a lo anterior, si bien suele usarse el derecho penal *mutatis mutandi* en el ámbito electoral, mediante el SUP-RAP-117/2003, la Sala Superior señaló las diferencias entre estas ramas del derecho de la manera siguiente:

“(…)

*Por estas razones, la forma en que se establecen los ilícitos y las penas en el derecho administrativo sancionador, para cumplir con la disposición constitucional establecida en el artículo 14, referente al establecimiento de leyes exactamente aplicables al caso, es distinta que en el derecho penal.*

(…)

*Lo anterior, toda vez que en el derecho penal se protegen un número reducido de valores jurídicos bien identificados, que en función de su importancia permiten establecer penas específicas y adecuadas para cada uno de los tipos que regula, lo que no siempre sucede en el derecho administrativo sancionador; por lo que si en el derecho administrativo el bien jurídico último que invariablemente se protege es el bienestar general, es razonable concluir que el legislador establezca un catálogo de sanciones generales y reglas para su individualización, pues el valor protegido, así como su afectación, no variaría en la medida que sucede en el derecho penal, de modo tal que la autoridad competente sería la encargada de elegir cuál de las sanciones debe imponerse e individualizarla.*

(…)”

De ahí que la tipicidad de una conducta ilícita en materia penal es distinta a la de la materia electoral, ya que en esta última el legislador establece un catálogo de sanciones generales y reglas para su individualización y tiene como propósito el bienestar general.

Por lo que en materia sancionadora electoral existe la posibilidad acreditar una conducta que en apariencia sea lícita, pero que vulnere principios rectores de la función fiscalizadora electoral y que, a su vez, no esté descrita de manera específica.

La circunstancia descrita se presenta en el asunto que se resuelve, ya que la compra de combustible por parte de Movimiento Ciudadano en *prima face* es lícita, sin embargo, al tener en cuenta los elementos analizados previamente, es decir, la dualidad como Coordinador y socio accionista del proveedor y la decisión de contratar con este último, se vulnera el uso adecuado de los recursos allegados como principio rector de la actividad electoral.

Lo anterior se afirma, ya que el financiamiento público se encuentra conformado por los recursos económicos que el Estado otorga a los partidos políticos para que realicen las funciones y cumplan con los fines que la ley establece y puede darse de manera directa, mediante la entrega de recursos para la realización de actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades específicas, por lo que los partidos están constreñidos a destinar el financiamiento que reciban atendiendo a los fines para los cuales se les entrega.

Lo anterior implica que, alguien que paralelamente se desempeña como un socio accionista y Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de dicho partido, impide cumplir de manera objetiva con las políticas o reglas de gastos por adquisiciones, **ya que aceptar lo contrario, supondría considerar que entre los fines del financiamiento destinado a los partidos políticos, se encuentra generar beneficios económicos personales a sus dirigentes.**

Acentúa dicha situación lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-758/2017, en el cual se señaló lo siguiente:

*“145. En ese sentido, con independencia de las obligaciones específicas impuestas en la Constitución y en las leyes generales de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales y en materia de transparencia, y demás ordenamientos en materia político-electoral, **los partidos políticos como entidades de interés público se encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en las leyes de esas materias** por tratarse de sujetos que reciben recursos públicos del erario y que deben ejercerlo exclusivamente para los fines señalados en la Constitución y la Ley, sin que pueda advertirse un régimen de excepción por tratarse de organizaciones de ciudadanos creadas para cumplir con fines constitucionales delimitados y acotados en la materia político-electoral.”*

**[Énfasis añadido]**

En consecuencia, adicionalmente a las obligaciones específicas impuestas en la Constitución, en las leyes generales, de transparencia y demás normatividad político-electoral, los partidos políticos se encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en las leyes de esas materias por tratarse de recursos públicos del erario.

Asimismo, en sus manifestaciones el partido señaló que solicitó precios de mercado de venta del combustible a dos gasolineras del mismo ámbito territorial, por lo que a dicho del mismo incoado, queda claro que sí existían más proveedores que otorgaran el mismo servicio que Servi Las Playas, S.A. de C.V, razón por la cual el partido político no logró demostrar que dicha persona moral era la única opción que tenía de contratación o, en su caso, justificar que no colocó al proveedor en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores inscritos también en el Registro Nacional de Proveedores, generándole al dirigente y accionista proveedor un beneficio económico personal indebido. Lo anterior en razón de que, si bien los entes políticos se encuentran en libertad de adquirir con quien

estimen conveniente, acorde a la oferta del mercado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus tareas, siempre que éstos se encuentren en el Registro Nacional de Proveedores, lo cierto es que dichas operaciones deben estar apegadas a las reglas que establece la normatividad, por lo que el hecho de que las empresas de las que adquiere diversos bienes y servicios sean propiedad de dirigentes del partido configuran un beneficio para éstos y con ello un claro e inequívoco fraude a la ley, pues se pervierte el fin por el cual les es otorgado el financiamiento.

Es importante tener en cuenta que el sistema de fiscalización de los recursos tiene por objeto verificar que sus ingresos y gastos se lleven a cabo en cumplimiento de las disposiciones aplicables y mediante sistemas que transparenten la fuente y origen de los recursos, así como su destino.

En efecto, el propósito del sistema de fiscalización es fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, así como proteger la certeza y buen manejo del erario en posesión de los institutos políticos, conforme los objetivos que persiguen.

Por lo tanto, el uso de recursos por parte de los partidos políticos encuentra límites en relación con su destino, debido a que su financiamiento únicamente puede corresponder a los fines que establece la ley, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su naturaleza de entidades de interés público, por lo que se debe observar que el destino de los recursos públicos sea adecuado y acorde a los principios rectores de la materia electoral.

De ahí que esta autoridad considere que el partido político incoado realizó un uso indebido de recursos, al haberlos erogado en cuestiones ajenas o diversas a su naturaleza de entidades de interés público, ya que dichas operaciones implicaron un beneficio económico para personal del propio partido político investigado. Por tal razón, la observación **no quedó atendida**.

Resulta conveniente señalar que la Sala Regional de la Ciudad de México, a través de la sentencia SCM-RAP-6/2021, resolvió un asunto análogo al que ahora se vislumbra, ya que determinó que existía un uso indebido de recursos, toda vez que las funciones partidarias no deben ser realizadas por quienes tengan un interés privado, ya que el sujeto obligado contrató los servicios profesionales de un particular como su representante, que al mismo tiempo ejerce responsabilidades como dirigente partidista, como se transcribe a continuación:

*“(…)*

*Esto es, las funciones partidarias no deben ser realizadas por quienes tengan un interés privado como el del caso específico en donde el recurrente contrata los servicios profesionales de un particular –Jaime Piñón Valdivia–, como su representante que al mismo tiempo ejerce responsabilidades como dirigente partidista.*

*(…)”*

De ahí que, el presente asunto coincide en que la persona que ejerce responsabilidades como dirigente partidista, también mantiene un interés privado con la empresa con la que se contrató el servicio multicitado.

#### **Manifestaciones de Movimiento Ciudadano**

En síntesis, el partido Movimiento Ciudadano adujo lo siguiente:

- 1) La compra de combustible forma parte de las actividades ordinarias permanentes de un partido.

#### **Respuesta.**

Como se acreditó en líneas anteriores, la compra de combustibles en el marco del desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de un partido es una actividad lícita. Sin embargo, en este caso fungió como una simulación de lícito para el partido para beneficiar de manera personal a su dirigente, el C. Luis Walton Aburto, ya que tenía un interés privado, circunstancia que es contraria con los principios rectores de la función electoral como el uso adecuado de los recursos públicos.

- 2) El INE se rige principalmente por el principio de legalidad – No existe disposición expresa-

#### **Respuesta**

La anterior afirmación es cierta, sin embargo, dicho principio no se limita únicamente a la regulación de las normas, sino que también vigila los principios y valores rectores de la función fiscalizadora electoral.

- 3) El C. Luis Walton Aburto no llevó a cabo la celebración de los contratos.

#### **Respuesta**

Como se acreditó de manera previa, Luis Walton Aburto fue Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, facultada para ***dirigir la gestión administrativa y financiera, así como representar a Movimiento Ciudadano con todas las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas***, por lo que aun cuando no firmó los contratos, era parte de sus funciones dirigir las gestiones mencionadas.

- 4) Las concesionarias que se dedican a distribuir o vender combustible no fijan su precio a su libre albedrío, puesto que los precios son fijados bajo ciertos estándares o elementos del Gobierno de la República.

#### **Respuesta**

Contrario a lo que señala el partido político, esta autoridad fiscalizadora electoral no pretende sancionar el costo del combustible o si existe una posible subvaluación o sobrevaluación, ni mucho menos el libre ejercicio del comercio, lo que se reprocha es el uso indebido de los recursos, ya que con la dualidad simultánea de Luis Walton Aburto como directivo de Movimiento Ciudadano y proveedor, se decidiera únicamente contratar con Servi Las Playas, S.A. de C.V.,

teniendo en cuenta los intereses personales y posicionándolo de manera preferente, favorable o conveniente.

- 5) Tanto las ganancias económicas como las pérdidas son distribuidas en proporción a sus aportaciones, esto es, en ningún momento se trata de un beneficio o perjuicio particular.

**Respuesta**

Lo que esta autoridad electoral considera sancionable es la decisión de contratar únicamente con una empresa en la que un directivo partidista gestionaba las cuestiones administrativas y al mismo tiempo era socio accionista del proveedor, lo cual generó un beneficio indebido con cargo al erario público.

- 6) No es competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización determinar el posicionamiento de una persona moral dentro del mercado.

**Respuesta**

Como se señaló a lo largo del presente acatamiento, lo que se reprocha por parte de la autoridad electoral y que resulta competente para ello, es haber obtenido un beneficio económico indebido, derivado de que haya contratado únicamente con la empresa de la que el dirigente en comento es socio accionista mayoritario.

- 7) Imponer sanciones por este tipo de conductas traería consigo imponer requisitos implícitos en la celebración de contratos entre un partido político y un proveedor. Inclusive, se restringiría tácitamente el objeto social del proveedor –a pesar de estar facultado estatutariamente- pues le impediría celebrar actos jurídicos con partidos.

**Respuesta**

Como se señaló anteriormente, no se pretende limitar el libre ejercicio del comercio, sin embargo, el partido político, como entidad de interés público y al ejercer erario público, debe conducirse bajo los cauces legales y los fines constitucionalmente establecidos, vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en las leyes de esas materias.

**Conclusión**

**6-C4-GR**

*El sujeto obligado realizó un inadecuado uso de recursos al contratar con el proveedor “Servi Las Playas, S.A. de C.V.”, cuyo socio es Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, generándole un beneficio económico personal indebido; por un importe de **\$438,444.16***

**Falta concreta**

Uso indebido de recursos

#### Artículo que incumplió

Artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el 3, numeral 1 de la LGPP  
(...)"

**9.** Que la Sala Regional Ciudad de México, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el expediente SCM-RAP-38/2019, las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG468/2019, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del Considerando "**18.2.13 Comisión Operativa Estatal en Guerrero**", inciso **b)**, conclusión **6-C4-GR**, en los siguientes términos:

"(...)

#### **18.2.13 Comisión Operativa Estatal en Guerrero**

(...)

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado relativas a la Comisión Operativa Estatal en Guerrero de Movimiento Ciudadano, es importante mencionar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias de la Comisión en cita, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el instituto político son las siguientes:

(...)

**b) 1** falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **6-C4-GR**.

(...)

**b)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, a saber:

No.	Conclusión	Monto involucrado
6-C4-GR	<i>“El sujeto obligado realizó un inadecuado uso de recursos al contratar con el proveedor “Servi Las Playas, S.A. de C.V.”, cuyo socio es Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, generándole un beneficio económico personal indebido; por un importe de \$438,444.16.”</i>	\$438,444.16.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado<sup>11</sup>, el cual forma parte de la motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al

11 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado.[...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]”



recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando relativo a la capacidad económica de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta **(inciso A)** y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción **(inciso B)**.

## **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el siguiente inciso, la falta corresponde a la **acción**<sup>12</sup> del sujeto obligado al realizar un inadecuado uso de recursos al contratar con un proveedor cuyo socio es Coordinador de la Comisión Operativa en dicha entidad, generándole un beneficio económico personal indebido, atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

---

<sup>12</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

**b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en la siguiente:

Conducta infractora		
No.	Conclusión	Monto involucrado
6-C4-GR	<i>“El sujeto obligado realizó un inadecuado uso de recursos al contratar con el proveedor “Servi Las Playas, S.A. de C.V.”, cuyo socio es Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, generándole un beneficio económico personal indebido; por un importe de \$438,444.16.”</i>	\$438,444.16.

Cabe precisar, que en el asunto que nos ocupa, las circunstancias de modo atienden a que el sujeto obligado contrató la prestación del servicio de gasolina por el monto antes señalado, con una empresa de carácter mercantil, en la que uno de los socios también ostenta el cargo de Coordinador de la Comisión Estatal de Guerrero, del mismo partido; generándole al dirigente y accionista proveedor un beneficio económico personal indebido.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2018.

**Lugar:** La irregularidad se cometió en el estado de Guerrero.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización

de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas sustanciales al destinar parte de sus recursos en la contratación de bienes y servicios con empresas de carácter mercantil, constituidas por funcionarios del propio partido político, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos de los partidos políticos.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera el uso adecuado de los recursos allegados como principio rector de la actividad electoral. Consecuentemente, el sujeto obligado transgrede los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos.

Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales aplicables.

Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en la misma Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las actividades siguientes:

Actividades ordinarias permanentes,

Gastos de campaña, y

Actividades específicas como entidades de interés público.

De lo expuesto, se sigue que los partidos para lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

Las **actividades políticas permanentes** que a su vez se clasifican en:

Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a incrementar

constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente y,

Las destinadas al desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.

Las destinadas a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Las **actividades específicas de carácter político electoral**, como aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas, mediante propaganda electoral y actos de precampaña o campaña, y que tienen como objetivos: i) la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular; ii) la presentación de su Plataforma Electoral; y, iii) el llamamiento al voto de la ciudadanía; todo ello, para que sus candidatos obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que dispongan por cualquiera de las modalidades establecidas en la misma Legislación Electoral<sup>13</sup>, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo ordenamiento legal antes aludido.

De lo anterior, se sigue que, respecto del financiamiento público y privado de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.

Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

---

13 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, señalan que tendrá las siguientes modalidades: **1)** financiamiento público; **2)** financiamiento por la militancia; **3)** financiamiento de simpatizantes; **4)** autofinanciamiento y, **5)** financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Es por ello que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los fines señalado por la ley.

Expuesto lo anterior, en la conclusión en estudio el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.<sup>14</sup>

Lo anterior es así, toda vez que dichas normas contemplan las obligaciones de los partidos como lo es el conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Concatenado con lo anterior, el artículo 63, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos establece la obligación de los sujetos obligados a *“Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas”*

Lo anterior implica que, alguien que paralelamente se desempeña como un socio accionista y Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de dicho partido, impide cumplir de manera objetiva con las políticas o reglas de gastos por adquisiciones, ya que **aceptar lo contrario, supondría considerar que entre los fines del financiamiento destinado a los partidos políticos, se encuentra generar beneficios económicos personales a sus dirigentes.**

---

<sup>14</sup> **Artículo 25.** 1. Son obligaciones de los partidos políticos a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos (...) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados; **Artículo 3.** 1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Por lo que, al contratar con un proveedor, cuyo socio es Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de dicha entidad, resulta contrario a derecho; ello en razón de que si bien es parte de la sociedad mercantil y los beneficios se reparten, no niega la obtención de ganancias para dicho accionista que, de manera paralela, desempeña funciones directivas dentro del partido político incoado.

Cobra sentido lo anterior, si se considera que la Comisión Operativa Estatal tiene entre otras facultades la de *“Dirigir la gestión administrativa y financiera, de manera que el uso de los recursos se apegue a los Estatutos, a los requerimientos de la normatividad electoral y a los criterios contables, administrativos y financieros de la Tesorería Nacional de Movimiento Ciudadano.”*<sup>15</sup>, comisión de la que el C. Luis Walton Aburto formó parte como Coordinador.

Así, con la dualidad con la que contaba el C. Luis Walton Aburto, es decir, por un lado Coordinador de la Comisión Operativa Estatal y, por otro, socio de la principal persona moral con la que contrataron los servicios objeto de observación, resulta evidente que las decisiones que se tomaban respecto al destino de los recursos públicos del partido político se vieron orientadas a contratar con la persona moral que entre sus socios se encuentra el multicitado ciudadano.

En ese sentido, con la posibilidad de *“dirigir la gestión administrativa y financiera”* de los recursos del partido político y sin que el partido pudiera justificar el por qué se decidió contratar únicamente con la multicitada persona moral, es que ésta autoridad arriba a la conclusión de que existe un beneficio indebido al acreditarse un conflicto de intereses que generó una afectación del desempeño imparcial y objetivo en el uso de los recursos públicos.

Es importante resaltar que, como lo señaló la Sala Regional Ciudad de México, el sistema de fiscalización tiene como finalidad fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, así como proteger la certeza y un buen manejo del erario en posesión de los institutos políticos.

Asimismo, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-758/2017 señaló lo siguiente:

*“145. En ese sentido, con independencia de las obligaciones específicas impuestas en la Constitución y en las leyes generales de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales y en materia de transparencia, y*

---

15 Reglamento de los Órganos de Dirección del partido político Movimiento Ciudadano, consultable en la siguiente liga: <https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/reglamento-organos-direccion-2017.pdf>

*demás ordenamientos en materia político-electoral, los partidos políticos como entidades de interés público se encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en las leyes de esas materias por tratarse de sujetos que reciben recursos públicos del erario y que deben ejercerlo exclusivamente para los fines señalados en la Constitución y la Ley, sin que pueda advertirse un régimen de excepción por tratarse de organizaciones de ciudadanos creadas para cumplir con fines constitucionales delimitados y acotados en la materia político-electoral.”*

En consecuencia, adicionalmente a las obligaciones específicas impuestas en la Constitución, en las leyes generales, de transparencia y demás normatividad político-electoral, los partidos políticos se encuentran vinculados a los principios hacendarios y presupuestales establecidos en las leyes de esas materias por tratarse de recursos públicos del erario.

Por lo tanto, al existir un conflicto de intereses derivado de la dualidad con la que contaba el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal (directivo del partido y socio de la persona moral con la que se contrataba) se usó de manera indebida los recursos públicos del partido político, los cuales tienen fines específicos.

Así, el partido político no logró justificar el haber colocado al proveedor en una posición superior, mejor, preferente, favorable o conveniente, respecto de otros proveedores inscritos también en el Registro Nacional de Proveedores, ni pudo demostrar que dicha persona moral era la única opción que tenía de contratación, generándole al dirigente y accionista proveedor un beneficio económico personal indebido.

En el caso concreto, la persona moral denominada “Servi Las Playas, S.A. de C.V.”, persigue fines distintos de los de cualquier instituto político, pues los de carácter privado y económico son los que predominan sobre sus actividades y fines para los que fue creada, al ser una empresa del sector privado dedicada a la distribución de combustibles (gasolina).

Por otra parte, como se señaló anteriormente, cualquier fin que tengan los partidos políticos estarán encaminados al fomento y desarrollo de la vida democrática del país, y los recursos que para ello se empleen, serán los que estén previstos por los ordenamientos correspondientes.

En ese sentido, si cada una de las entidades antes descritas tienen un manejo distinto de los recursos económicos que administren, el hecho de que una persona física tenga el carácter de cliente y proveedor al mismo tiempo, puede generar un conflicto de interés de carácter económico, al generar una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones del

partido político en cualquiera de sus Órganos que lo conforman, en razón de intereses personales o de negocios.

Ahora bien, los entes políticos se encuentran en libertad de adquirir con quien estime conveniente acorde a la oferta del mercado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus tareas; sin embargo, dichas operaciones deben estar apegadas a las reglas que establece la normatividad, por lo que el hecho de que las empresas de las que adquiere diversos bienes y servicios sean propiedad de dirigentes del partido configura, un **claro e inequívoco fraude a la ley**, pues se pervierte el fin por el cual les es otorgado el financiamiento.

En otras palabras, si bien es cierto que el partido político incoado puede comprar combustible con el proveedor de su elección, al contratar específicamente a Servi Las Playas, S.A. de C.V., **cuyo socio mayoritario tiene participación, decisión y forma parte de la estructura del partido**, reflejando conductas que no están expresamente prohibidas por la ley, sin embargo, el procedimiento de adquisición carece de los criterios de honestidad, certeza y transparencia produciendo un resultado adverso a la normativa.

Sobre el particular, la Sala Superior, en la sentencia SUP-JDC-057/2002, citando a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero en su obra **Ilícitos atípicos** (Madrid: Trotta, 2000) ha establecido lo siguiente:

*“El fraude de ley suele presentarse como un supuesto de infracción indirecta de la ley, a diferencia de los ilícitos que nosotros hemos llamado ‘típicos’, en los que se da un comportamiento que se opone directamente a una ley. La estructura del fraude consistiría, así, en una conducta que aparentemente es conforme a una norma (‘a la llamada norma de cobertura’), pero que produce un resultado contrario a otra y otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto (‘norma defraudada’). Igualmente, en la citada sentencia, la H. Sala Superior retoma lo dicho por Caffarena y Laporta, en la voz ‘fraude de ley’, de la **Enciclopedia Jurídica Básica** (Madrid: Civitas, 1995), en el sentido de que: El artículo 6.4 CC (Código Civil Español), que se encuentra en el Título preliminar dentro del capítulo dedicado a la eficacia general de las normas jurídicas, contempla la figura del fraude de ley: ‘los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir’”.*

Tomando en consideración lo anterior, así como lo sustentado por el órgano jurisdiccional en la sentencia SUP-RAP-034/2003, se advierte que una conducta puede no **estar expresamente prohibida**, lo cual significa que puede estar *prima facie* permitida, pero no permitida sin más, porque cabe la



posibilidad de que esa conducta produzca un resultado contrario a otra y otras normas.

En la especie, las conductas que no están expresamente prohibidas son que los sujetos obligados contraten bienes y/o servicios (contratar con el proveedor “Servi Las Playas, S.A. de C.V.”, cuyo socio es Coordinador de la Comisión Operativa Estatal en Guerrero) o que los dirigentes de un partido tengan como actividad económica el ser propietarios y/o socios de empresas proveedoras de diversos bienes y servicios; sin embargo, las consecuencias de sumar ambas conductas es lo que produce un resultado contrario a otra norma, a saber, lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

Esto es, la norma establece por un lado, que los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático de Derecho y, por otro lado, que deben utilizar y aplicar el financiamiento exclusivamente para el cumplimiento de los fines para el que les ha sido entregado, es decir, el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para el desarrollo de sus actividades específicas y del liderazgo político de las mujeres, o bien, para sufragar sus gastos de campaña, pero nunca para beneficiar por la vía del partido político el peculio de un dirigente.

Lo anterior es así, tomando en cuenta que la conducta del sujeto obligado violenta estas disposiciones jurídicas, pues se aparta de los cauces legales al generar un beneficio económico a su dirigente con recursos del partido.

En la especie, la conducta llevada a cabo configura una simulación al haber adquirido bienes y/o servicios de un proveedor (acto aparente) para en realidad hacer que funcionario directivo del partido obtuviera un beneficio económico personal como socio de la empresa que prestó el bien y/o servicio (acto real), desvirtuando con ello los fines para los que se constituyó el financiamiento de los partidos políticos.

Aceptar lo contrario supondría considerar que entre los fines del financiamiento destinado a los partidos políticos se encuentra el generar beneficios económicos personales a sus dirigentes.

En las relatadas condiciones, es dable señalar que el financiamiento de los partidos tiene como finalidad que éstos se alleguen de los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades ordinarias y de campaña, así como para cumplir con el mandato constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos, de

acuerdo con los programas, principios es ideas que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; cualquier conducta que suponga un empleo del recurso con un fin distinto a los antes descritos, como en la especie, en que el sujeto obligado se constituye como intermediario para que sus dirigentes obtengan beneficios económicos estrictamente personales, no puede pasar inadvertida por esta autoridad.

Consecuentemente, se advierte que el sujeto obligado ha simulado la debida observancia de la ley, al realizar operaciones comerciales con empresas mercantiles que tiene como socio al Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de dicha entidad.

Por tanto, como ya se mencionó, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En ese sentido, la falta consistente en omitir destinar el financiamiento allegado exclusivamente para los fines legalmente permitidos, y al haber realizado un inadecuado uso de recursos al realizar operaciones comerciales con empresas mercantiles que tiene como socio al Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de dicha entidad, generándole un beneficio económico personal indebido, detectado durante la revisión de los informes anuales, por si misma constituye una falta sustantiva o de fondo, porque con dicha infracción se acredita la vulneración directa al principio de legalidad y al bien jurídico tutelado del uso adecuado de los recursos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela del principio de legalidad en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye

a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a) y n) en relación con el 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

### **Calificación de la falta cometida.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.<sup>16</sup>

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 6 del presente Acuerdo**<sup>17</sup>, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

---

16 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

17 En la resolución INE/CG468/2019 se analizó la capacidad económica de los sujetos obligados en el considerando **12. Capacidad económica**.

### **Conclusión 6-C4-GR.**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en razón de que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$438,444.16 (cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>18</sup>

---

18 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **30% (treinta por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$438,444.16 (cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$131,533.25 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$131,533.25 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
(...)"

**10.** Que la sanción originalmente impuesta a Movimiento Ciudadano en la resolución **INE/CG468/2019**, consistió en:

Sanción en Resolución INE/CG468/2019	Modificación	Sanción en Acatamiento a la Resolución SCM-RAP-38/2019
<b>DÉCIMO CUARTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.13 correspondiente a la <b>Comisión Operativa Estatal en Guerrero</b> , de la presente Resolución, se imponen	En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Ciudad de México en el recurso de apelación SCM-RAP-38/2019, se repuso el procedimiento de fiscalización en el apartado correspondiente, por lo que se dio	<b>DÉCIMO CUARTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.13 correspondiente a la <b>Comisión Operativa Estatal en Guerrero</b> , de la presente Resolución, se imponen

Sanción en Resolución INE/CG468/2019	Modificación	Sanción en Acatamiento a la Resolución SCM-RAP-38/2019
<p>a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes: (...)</p> <p><b>b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-GR</b></p> <p>Una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$131,533.25 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.)</b>.</p>	<p>garantía de audiencia al partido Movimiento Ciudadano mediante oficio INE/UTF/DA/12091/19 al cual dicho sujeto obligado dio respuesta mediante escrito de fecha 14 de enero de 2020.</p> <p>En consecuencia, esta autoridad se abocó al análisis de la documentación que presentó el partido político incoado, respecto de la observación emitida en el oficio de errores y omisiones, a efecto de que esta autoridad, conforme al ejercicio de sus atribuciones, emita un nuevo Dictamen y Resolución de la parte conducente. Sin embargo, la observación <b>no quedó atendida</b>, de conformidad con lo establecido en el Dictamen de mérito.</p>	<p>a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes: (...)</p> <p><b>b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-GR</b></p> <p>Una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$131,533.25 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.)</b>.</p>

**11.** Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo se modifica el **Resolutivo DÉCIMO CUARTO** para quedar en los siguientes términos:

“(…)

## RESUELVE

(…)

**DÉCIMO CUARTO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.2.13 correspondiente a la Comisión Operativa Estatal en Guerrero, de la presente Resolución, se imponen a Movimiento Ciudadano, las sanciones siguientes:

(…)

**b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 6-C4-GR**

Una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$131,533.25 (ciento treinta y un mil quinientos treinta y tres pesos 25/100 M.N.)**.

(…)

**12.** Que en el punto OCTAVO del Acuerdo INE/JGE34/2020 se estableció privilegiar las notificaciones electrónicas, sobre las personales, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.
2. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
3. Esta autoridad cuenta con la carta en la que la representación de cada sujeto obligado manifestó su consentimiento para ser notificados vía correo electrónico.

En consecuencia, se considera que cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.

Para ello, la vía de comunicación idónea es a través de su cuenta habilitada en el Sistema Integral Fiscalización, con apoyo en las tecnologías existentes para compartir documentación con un volumen considerable. Esto, en los hechos representa una facilidad administrativa que busca simplificar la comunicación entre los sujetos obligados y la autoridad fiscalizadora; así como salvaguardar la integridad física de las personas que intervienen en las actividades y comunicaciones ambas instancias.

Así, los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local pueden notificarse a través del Sistema Integral de Fiscalización; pues al tratarse de la misma persona jurídica resulta apegado a derecho hacer del conocimiento de la representación nacional lo determinado por el máximo órgano de decisión. Este criterio ha sido



sostenido por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-38/2016.

**En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG462/2019** y la Resolución **INE/CG468/2019**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en los términos precisados en los Considerandos **8, 9, 10 y 11** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **dentro de los tres días hábiles siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SCM-RAP-38/2019**, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.

**TERCERO.** Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que proceda al cobro de las sanciones impuestas al partido Movimiento Ciudadano, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción económica sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

**CUARTO.** Notifíquese electrónicamente al partido político Movimiento Ciudadano a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el **Considerando 12** del presente Acuerdo.

**QUINTO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**SEXTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de marzo de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**